

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA DESIGUALDAD SOCIAL

PABLO RIVAS SANTOS

*EL AUTOR REFLEXIONA SOBRE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS A LA DIFERENCIA DE RENTAS Y
PATRIMONIOS EN LA ECONOMÍA DE MERCADO Y SU MANIFESTACIÓN EN EL PERÚ*

La diferencia de rentas y patrimonios es una característica de la economía de mercado. Su eliminación implicaría la quiebra de la economía de mercado.

Quienes creen en la igualdad de riqueza aspiran a aumentar su personal capacidad adquisitiva. Nadie pretende distribuir sus propias rentas. El trabajador de las más grandes empresas del país, cuando reclama mayor igualdad, lo único que desea es eliminar las ganancias empresariales para así incrementar sus propias rentas. Molesto, rechaza cualquier reducción de su salario en favor del 80% de la población económicamente activa ocupada y que gana mucho menos que él.

Contrastemos el caso de Perú y Chile. Perú desarrolló entre 1930 y 1973 una economía creciente, estaba situado muy por delante de Chile. Sin embargo, a partir de 1979 Chile era un país emergente, mientras Perú se hundía en la pobreza. La economía peruana había quedado congelada, sin posibilidad de progreso en el corto y mediano plazo.

Perú practicó el “principio igualitario” con mayor intensidad que Chile. Los terrenos de cultivo se dividían y subdividían incesantemente. En la sierra y selva peruana prácticamente no existían trabajadores agrícolas carentes de tierras. En Chile, antes de 1973, la fuerza laboral era numerosa. Las prácticas *restrictivas* chilenas, inspiradas en la ideología tradicional, habían hecho imposible la aparición del empresario eficiente. Sin embargo, la industrialización de Chile a partir de 1979,

gracias a la existencia de esa fuerza laboral numerosa, pudo progresar a pasos agigantados tan pronto como la intelectualidad logró abrir las puertas a la economía de mercado, poniendo de manifiesto los errores de la restricción mercantilista.

Sabemos que siempre habrá gente deseosa de cosechar ganancias acomodando la producción a los deseos y apetitos de los consumidores. El pensamiento moderno hizo caer las antiguas barreras y prohibiciones que impedían a la gente alcanzar el bienestar y progreso.

Los economistas serios buscan hacer posible el correcto funcionamiento del mercado. Apuestan por la eliminación de privilegios, con el deseo de que nadie impida a los más capaces producir la mayor cantidad y del modo más económico posible. En este aspecto, los economistas serios y los intervencionistas combatían los privilegios; pero, a diferencia de los intervencionistas, los economistas serios nunca basaron su razonamiento en el *Derecho Natural*. Ambos grupos reclamaban por la *igualdad de todos ante la ley*; no obstante, se mantuvo la diferencia entre ambos grupos de economistas.

Los intervencionistas dicen que las personas (biológicamente) son todas iguales, en consecuencia, cada persona tiene el inalienable derecho a una parte de todos los bienes disponibles. La primera afirmación se contradice con la realidad misma; la segunda afirmación, llevada hasta las últimas consecuencias, conduce a *tales* absurdos que sus defensores dejan de lado toda consistencia lógica y terminan considerando a cualquier institución (por discriminatoria e injusta que sea) compatible con la inalienable y soberana igualdad. El más déspota sistema de gobierno se presenta como la propia encarnación de la libertad y la igualdad.

Los economistas, serios defensores del principio de la igualdad de todos ante la ley, se dan cuenta de la natural desigualdad humana; comprenden que tal desigualdad es la causa y origen de la cooperación social y la civilización. Saben que la igualdad de todos ante la ley no modifica ninguna de las inexorables realidades del mundo en que vivimos y no elimina la natural desigualdad humana. De este hecho inmodificable, los economistas serios se proponen sacar el máximo provecho para todos. Piensan que ninguna institución debería de entorpecer a nadie, impidiéndole alcanzar aquella posición desde la cual puede servir mejor a sus semejantes. El problema de la desigualdad lo contemplan bajo la óptica de lo social y utilitario, dejando de lado supuestos derechos humanos inalienables. La igualdad de todos ante la ley les complace porque beneficia a todo el mundo. Bajo su dominio los electores *designan* a los gobernantes, mientras los consumidores *dirigen*

las actividades productivas. Así, resultan eliminadas las causas mismas de guerras y conflictos y queda implantado un sistema económico en constante progreso.

Tal modo de pensar se impone donde es débil el *principio igualitario*. Nunca atrajo este modo de pensar al peruano de 1960-1990, porque estaba obsesionado por la falsa idea de la igualdad de rentas y patrimonios.

Los intelectuales nacionalistas dieron nuevo impulso a esa falsa idea. Se lanzaron a exaltar la propiedad agraria comunal, según se manifestaba en la prensa manipulada.

Cuando se califica de atrasados a los países latinoamericanos se está diciendo que dichos países “no supieron producir” aquella base ideológica e institucional que engendró la economía de mercado, cuya superioridad implícitamente reconocen los latinos al reclamar los frutos o, al menos, las tecnologías de tal sistema económico. No obstante, la cultura de ciertos países latinoamericanos (como la incaica y azteca) fue en determinadas épocas muy superior a la de sus contemporáneos norteamericanos, asiáticos y europeos; es por eso interesante investigar las causas que un día paralizaron el progreso en Latinoamérica.

Las ideas de igualdad económica que los políticos latinoamericanos pretendían plasmar eran vagas y confusas. Sin embargo, eran claros y tajantes al condenar la acumulación de riqueza en manos de la gente. El gobierno y la gente pensaban que acumular riqueza suponía previamente haber robado a otros lo que, en justicia, a ellos les correspondía; la riqueza de unos pocos era la causa de la pobreza de muchos. La posición de los grandes empresarios latinoamericanos era muy precaria. Se hallaban en manos de la burocracia dorada. Ni reclamos ni presentes podían evitar las reiteradas confiscaciones. La gente se alegraba cuando veía caer al ayer gran empresario víctima del odio y la envidia del gobernante.

Esa mentalidad anticapitalista impedía todo progreso y condenaba a la gente a vivir en la miseria. Resultaba prohibida la implantación de los avances tecnológicos, al resultar impracticable cualquier acumulación seria de capitales. Si millones de latinoamericanos estaban condenados al hambre y la miseria, ello se debía a la oposición contra cualquiera que pretendiese acumular grandes capitales.

Las ideas vagas y confusas sólo son claras y precisas cuando se trata de maldecir la riqueza de toda empresa poderosa y la acumulación privada de riqueza. Sus defensores recurren a cualquier medida que debilite y perturbe el mundo

de los negocios, pretenden imponer la igualdad a base de impuestos confiscatorios a la renta y patrimonio, y apelan a la envidia de la masa que enjuicia.

Como consecuencia de tal política se reducirán las tasas de crecimiento del capital, si no llegan a impedir su gestación e incluso provocar la desaparición del capital existente. Se irá paralizando el desarrollo económico y quedarán abiertas las puertas a un progresivo empobrecimiento de la gente. Ello supondrá el triunfo de las ideas populistas.

El paternalismo dirigista pretende aparecer como el defensor de los intereses de la sociedad frente al actuar egoísta del empresario hambriento de ganancias y asegura preocuparse por los intereses del país frente a empresarios y capitalistas olvidados del futuro de la sociedad e interesados por la ganancia inmediata.

Sabemos que el ahorro, la acumulación de capital y la inversión suponen desviar del consumo actual una parte de los bienes disponibles, con miras a mejorar futuras situaciones. El ahorrista reduce una satisfacción presente con el deseo de aumentar el bienestar de mañana, ya sea el propio o el de sus compañeros. Tales actuaciones vienen dictadas por motivaciones egoístas, ese egoísmo beneficia a todos los miembros de la sociedad y contribuye al futuro bienestar, y es el engendro del desarrollo económico y progreso social.

En cambio, las medidas recomendadas por el paternalismo dirigista reducen la posibilidad de ahorro de la gente, los impuestos que gravan las rentas y patrimonios de mayor importancia destruyen, o al menos, restringen el ahorro de los que tienen mayores recursos. De igual manera los ahorros de la gente de menores recursos son manejados de tal modo que acaban siendo destinados al consumo. Sabemos que la gente ahorra vía depósito bancario o seguro, el banco o el seguro invierte esos fondos en negocios productivos. Aún en el caso de que esas personas, con posterioridad, destinaran a gastos de consumo la cantidad en conjunto; no hay ni desinversión ni reducción del capital disponible; ya que los saldos deudores y, consecuentemente, las inversiones de bancos y seguros aumentan continuamente.

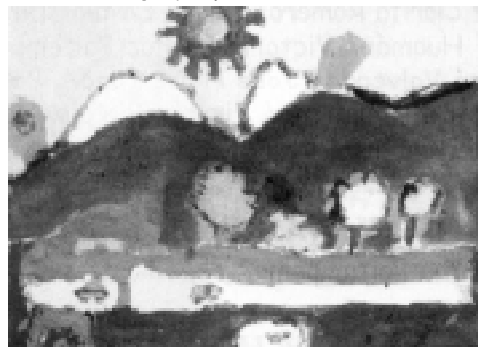
Hasta 1991 los gobiernos presionaban a bancos y seguros para que inviertan en compra de bonos públicos una proporción cada vez mayor de las sumas que reciben de sus clientes. El IPSS tenía que colocar parte de sus cuantiosas percepciones en bonos públicos. Este ahorro personal quedaba privado de poder, en lo referente a la acumulación de capital; en la misma medida en que el gobierno

gastaba en bienes de consumo o torpes inversiones aquello que recibía por la venta de bonos públicos. En la economía de mercado, el ahorro, la creación de capital y la inversión constituyen sumas idénticas y correlativas; en cambio, bajo una economía intervenida, el gobierno puede libremente dilapidar el ahorro de la gente. La gente se sacrifica y reduce su consumo con el deseo de proveer su futuro; por tal vía, aun sin él quererlo, contribuye al progreso económico del país y la elevación del nivel de vida de sus conciudadanos. Pero interviene el gobierno y modifica tan beneficiosos efectos. Así queda demostrada la inutilidad de ese mito manejado por el paternalismo dirigista, que nos presenta al individuo egoísta y miope interesado tan sólo en las satisfacciones del momento, siempre alejado del bienestar de sus conciudadanos y de la sociedad; y al gobierno humilde y sabio, entregado a promocionar la felicidad presente y futura de la gente.

El dirigista cuestiona ese planteamiento. *La primera objeción* consiste en destacar que la motivación de la gente es puramente egoísta, mientras que el gobierno actúa impulsado por desinteresadas consideraciones. Admitamos que la gente es “mala” y el gobierno “bueno”; pero lo que cuenta en la vida real son los hechos, no las buenas intenciones. La sociedad surge y sobrevive porque la pacífica cooperación social, bajo el signo de la división del trabajo, permite a la larga dar la satisfacción más cumplida posible a las egoístas aspiraciones de la gente. La mayor ventaja del mercado está en que su mecánica se halla orientada a concretar el anterior teorema.

La *segunda objeción* consiste en destacar que la inversión pública puede sustituir a la inversión privada. El gobierno no gasta en bienes de consumo todo lo que percibe; una parte es invertida en carre-

«Hacienda paisaji», Ayrton Sandoval, 9 años.



teras, trenes eléctricos, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y demás servicios públicos; otra parte se destina a aprovisionar a las fuerzas armadas y policiales cuyos gastos, sobre todo en caso de guerra, resultan difíciles financiar de otra manera. Se discute que el gobierno gasta y consume una parte del ahorro de la gente y que, al amparo del sistema estatista, se halla en posición de ir ampliando la porción consumida hasta absorber la totalidad de este ahorro.

Si el gobierno impide ahorrar al sector privado, el gobierno debería ahorrar e invertir para mantener capitalizado al país. El dirigista no puede darse cuenta de los gravísimos problemas involucrados, está convencido de que el gobierno sabio sabrá ir gradualmente llevando a la sociedad hacia situaciones cada vez más satisfactorias, con arreglo a un evolutivo progreso natural.

Sabemos que es necesario restringir el consumo actual para abastecer mejor el futuro, acumular nuevos capitales y conservar el capital existente. El ahorro supone un acto de privación, dejar de lado satisfacciones que en otro caso podrían haberse disfrutado. Las circunstancias del mercado inducen a practicar tal abstinencia e ilustran después al ahorrista-capitalista acerca de cómo invertir para atender las más urgentes necesidades de los consumidores lo mejor posible. ¿Puede el ahorro estatal sustituir al ahorro privado? ¿El gobierno puede saber cómo invertir aquel ahorro? Estas incógnitas han de ser aclaradas en los países donde se ha hecho casi imposible el ahorro privado.

Supongamos que un gobierno ha conseguido controlar una porción importante del ahorro privado. Ese gobierno “regula” en gran medida las inversiones del seguro social y los bancos, y presiona para que aquellas inversiones se orienten hacia la compra de bonos públicos. La gente sigue ahorrando. Que tal ahorro produzca nuevos capitales y, por ende, se amplíe la cantidad de bienes de capital disponible, depende del uso que el gobierno dé a los fondos que recibe. Si el gobierno dilapida tales fondos, gastándolos en consumo o invirtiéndolos desafortunadamente, queda debilitado aquel proceso de acumulación de capital tan acertadamente iniciado por el ahorro y la inversión del sector privado.

Supongamos que en un sistema de mercado, Juan ahorra 100 soles en un banco. Si Juan ha sabido elegir un buen banco, que invierta acertadamente esos 100 soles, se produce un nuevo capital que a su vez incrementa la productividad marginal del trabajo. Una parte de la mayor producción revierte a Juan en forma de interés. Por el contrario, si Juan se equivoca y encomienda su dinero a un banco que suspende pagos, entonces, lo pierde todo.

Contemplemos el caso de Juan que, bajo un sistema intervencionista, aportó al IPSS 100 soles en 1973. El IPSS por tal aporte reconoció a Juan el derecho a percibir en el 2003 cierta suma. Si el IPSS consumió esos 100 soles, no se produce incremento de capital y no aumenta la productividad marginal del trabajo. La deuda contraída por el IPSS con Juan se transforma en un crédito de “éste” contra los contribuyentes de mañana. Carlos tendrá en el 2003 que atender la deuda contraída en 1973 por el IPSS, aunque Carlos personalmente no haya obtenido ninguna ventaja del sacrificio de Juan.

Es notorio el carácter engañoso de aquel argumento según el cual “la deuda pública no es una carga, ya que sólo la debemos a nosotros mismos” ¡Los Juanes de 1973 no se la deben a sí mismos. Son los Carlos del 2003 los que la deberán a los Juanes de 1973! El IPSS de 1973 resolvió sus dificultades trasladándolas a la ONP del 2003, cuando llegue esta fecha los Juanes habrán muerto o estarán recordando “la gran obra de seguridad social que realizaron”.

Quien pase por alto la escasez de bienes de capital, no merece llamarse economista. Vive de espaldas a la realidad, en un paraíso donde todo abundaría. Los dirigistas, implícitamente presumen inacabables disponibilidades de bienes de capital, entonces es fácil solucionar todos los problemas económicos; dar a cada uno «de acuerdo con sus necesidades» y hacer feliz a todo el mundo.

Algunos dirigistas advierten que el capital existente debe ser conservado si no se quiere reducir la productividad marginal del trabajo. Pero incluso tales dirigistas desconocen que el mantenimiento del capital hoy disponible depende de acertadas y nuevas inversiones, es decir, de afortunadas especulaciones, por lo que resulta ineludible mantener intacto el capital recibido y recurrir al cálculo económico, el cual a su vez presupone la existencia de un mercado no adulterado. Los demás dirigistas ignoran por completo el problema. Igual da que pretendan apoyarse en esquemas estatistas o que, por el contrario, prefieran alucinar nuevas fantasías como la supuesta «capacidad de perpetuación» de las cosas útiles. Desgraciadamente difunden la idea según la cual todos los males provienen del excesivo ahorro y de la insuficiente capacidad de consumo, por lo que gastar sin freno sería el remedio.

Cercados por la lógica de los economistas serios, estatistas e intervencionistas reconocen que sólo el mantenimiento del actual capital puede evitar el descenso del nivel de vida, y que si en el futuro ha de haber progreso económico será inevitable acumular nuevos capitales. Además, sostienen que el gobierno se encarga-

rá de la conservación del actual capital y de la acumulación del capital adicional. Tareas tan trascendentales no quedarán ya en manos del hombre egoísta, interesado sólo por su propio enriquecimiento y el de su familia, el gobierno se ocupará de estos asuntos y los abordará con la vista puesta en el bienestar general.

Bajo un sistema no igualitario, impulsada por sus personales egoísmos, la gente ahorra y procura invertir del modo que mejor queden atendidas sus más urgentes necesidades. Por el contrario, bajo un sistema igualitario, tal incentivo se esfuma. La inmediata reducción del consumo constituye privación para la gente ahorrista, menoscabo de las egoístas apetencias de la gente. Al hombre medio le es difícil advertir las ventajas que le reportará un futuro mejor abastecido. Esta común reacción se agiganta bajo un sistema de ahorro estatal, pues el ahorrista ve lo poco que le tocará mañana en la común distribución, por su personal y actual sacrificio. Estadistas e intervencionistas suponen, con ligereza, que la gente ahorrará más al comprender que los frutos de sus privaciones ahorrativas se repartirán mañana entre toda la siguiente generación.

El problema relacionado al mantenimiento e incremento del capital no tiene solución para el estatista cuando no puede recurrir al cálculo económico. La nación estatizada carece de medios adecuados para averiguar si su capital aumenta o disminuye. Sin embargo, la situación no llega a ser tan grave para los sistemas intervencionistas a los que, por poder utilizar los precios de los mercados del mundo, todavía les cabe acudir al cálculo económico. Esta circunstancia les permite, hasta cierto punto, calibrar la marcha de los acontecimientos.

Hay gente que propugna dedicar al consumo inmediato cantidades más elevadas que las cantidades propuestas por el partido que gobierna. Hay gente que dice que en la “actual emergencia” ni siquiera cabe pensar en acumular capital para el futuro y que, por el contrario, lo justo y procedente es consumir una parte del existente. Los partidos políticos pugnan entre sí ofreciendo al electorado aumentar el gasto público y reducir las cargas tributarias, salvo aquellas cargas que soporta la gente más pudiente. Antes, la gente consideraba al gobierno como una institución que exigía sacrificio de su gente a través de los impuestos. En el presupuesto de cada familia, los impuestos eran considerados como un gasto más. Por el contrario, actualmente la mayoría ve en el gobierno una entidad “elogiosa”, trabajadores y campesinos esperan recibir del gobierno más de lo que piensan aportar. El gobierno es visto como fuente de “regalos”, no como colector de impuestos. Tan populares creencias fueron sistematizadas y elevadas al rango de teoría cuasi económica. Sin embargo, los gastos públicos y el déficit fiscal implican

consumo de capital. El gobierno se convierte en el gran derrochador del capital existente cuando los gastos ordinarios (por beneficiosos que se consideren) son cubiertos (tanto si se acude a la venta de bonos públicos como al impuesto al patrimonio) mediante impuestos a las rentas más elevadas, que en otro caso, se hubieran dedicado a la inversión.

Muchos, que se dan cuenta de las nocivas consecuencias que entraña el derroche del capital, se apresuran a afirmar que los sistemas basados en el voto popular jamás pueden aplicar correctas y sanas políticas económicas. Pero la democracia no tiene la culpa de esto, la culpa es de las ideas que sostienen la imagen de un gobierno semejante a un Papa Noel regalón, en vez de la imagen de un vigilante nocturno. La opinión pública decide siempre la política económica a seguir. Ningún gobierno, ni demócrata ni dictador, puede a la larga eludir el “mandato” de las ideas dominantes.

Quienes propugnan un recorte de las facultades parlamentarias en materia tributaria y presupuestaria, recomendando incluso la eliminación del gobierno representativo y su sustitución por una dictadura, se hallan sometidos a la fantasía del gobernante perfecto. Ese ser bondadoso y sabio por excelencia, procuraría con absoluta y leal dedicación, el continuo bienestar de sus gobernados. Sin embargo, el líder es una simple persona que, ante todo, aspira a perpetuar su posición y la su partido. Sólo con tal objetivo se atreve a recurrir a medidas impopulares. No invierte ni acumula capital, prefiere construir “elefantes blancos”.

Los planes de las dictaduras consisten en reducir el consumo de la población para “invertir” más. Los dictadores no ocultan que tales “inversiones” tienen por finalidad montar el oportuno aparato bélico para preparar mejor la agresión. La historia no registra ninguna acumulación de capital realizada por el gobierno. El capital invertido por el gobierno en carreteras, ferrocarriles y obras públicas fue siempre obtenido de la gente a través del impuesto o mediante la venta de bonos públicos. La mayor parte de la deuda pública se dedicó a gastos de consumo. La gente economiza, pero llega el gobierno y alegremente dilapida lo penosamente acumulado.

La desigualdad de rentas y patrimonios es poderosa incitación a la creación de nuevo capital. La acumulación de capital adicional provoca el avance tecnológico, el incremento real de salarios y la elevación del nivel de vida de la gente.

BIBLIOGRAFÍA

- BARRO, ROBERT J. MACROECONOMÍA. MADRID. ALIANZA EDITORIAL. SEGUNDA EDICIÓN 1992.*
FRIEDMAN, MILTON. MONEDA Y DESARROLLO. MÉXICO D.F. EDITORIAL ATENEO. 1972.
FRIEDMAN, MILTON. TEORÍA DE PRECIOS. MADRID. ALIANZA EDITORIAL. SEGUNDA EDICIÓN 1976.
FRIEDMAN, MILTON. BALANCE DE PAGOS. MÉXICO D.F. EDITORIAL ATENEO. 1957.
LUCAS, ROBERT. TEORÍA DE LOS CICLOS ECONÓMICOS. MADRID. ALIANZA EDITORIAL. 1987.
MUNDELL, ROBERT A. EL HOMBRE Y LA ECONOMÍA. BUENOS AIRES. EDITORIAL AMORRURTU. 1977.
SARGENT, THOMAS. TEORÍA MACROECONÓMICA. MADRID. EDITORIAL BOSCH. PRIMERA EDICIÓN 1987.
VON MISES, LUDWIG. TEORÍA DE LA MONEDA Y EL CRÉDITO. BARCELONA. EDITORIAL ZEUS 1961.
VON MISES, LUDWIG. TRATADO DE ECONOMÍA: ACCIÓN HUMANA. MADRID. FUNDACIÓN IGNACIO VILLALONGA. 1980.

«Los cerros», Ana María Fierro, 13 años.

